

ACUERDO SOBRE INCENDIOS Y LA SEGURIDAD DE EDIFICIOS EN BANGLADESH

La mañana del 24 de abril del 2013, el edificio Rana Plaza de 9 pisos en Bangladesh se colapsó, matando a 1,138 trabajadores y lesionando a más de 2,000. Fue el desastre más mortífero en la historia de la industria textil moderna.

Antes de su colapso, el edificio había alojado cinco fábricas textiles, produciendo ropa para marcas occidentales reconocidas, incluyendo Walmart, JCPenney, The Children's Place, Inditex (dueño de Zara), Loblaw, Primark, y muchas otras. Prácticamente todas estas empresas habían desarrollado estándares "robustos" para proveedores y presuntamente monitoreaban vigorosamente estos estándares usando equipos internos de personal y agencias de auditorías externas comerciales para inspeccionar sus fábricas regularmente. Sin embargo ninguna de estas corporaciones masivas, con millones de dólares a su disposición, identificó o tomó los pasos necesarios para corregir las grandes fallas estructurales que causaron el colapso.

Aunque Rana Plaza opacó a otros desastres con su magnitud, esta no fue ni la primera ni la última accidente letal en la industria textil en Bangladesh. Desde el 2005, más de 2,000 trabajadores han fallecido en incendios de fábricas y colapsos de edificios, un dato que las marcas que suministran de ese país sabían, pero se rehusaron a admitir, fallando en inspeccionar las fábricas de sus proveedores para asegurar medidas de seguridad críticas como salidas de emergencia para incendios y cableado eléctrico adecuado.

En el 2010, después de un incendio en la fábrica That's It Sportswear que mató a 29 trabajadores que

habían hecho ropa para Gap, Osh-Kosh, VF Corporación y PVH Corp. (dueño de Calvin Klein y Tommy Hilfiger), un grupo de aliados incluyendo el Consorcio de los Derechos del Trabajador, el Foro Internacional de Derechos Laborales, la Campaña por Ropa Limpia, la Red de Solidaridad de la Maquila, y la federación sindical global IndustriALL, se unieron para proponer un programa que le requeriría a las marcas hacer un compromiso vinculante y que se pudiera hacer cumplir para identificar y abordar violaciones de seguridad de sus proveedores en Bangladesh. La primera empresa en firmar fue PVH Corp., la cual accedió a hacerlo bajo acelerada presión pública después de que un reportaje de ABC News expuso lo poco que la compañía sabía de su propia cadena de suministro. La única otra empresa en firmar fue Tchibo, un minorista alemán. A pesar de meses de negociaciones, la marca Gap decidió en última instancia rehusarse a firmar, señalando su falta de disposición para hacer tales compromisos vinculantes.

No fue hasta el colapso de Rana Plaza en el 2013 que la presión de los medios de comunicación y los consumidores lograron que otras compañías firmaran una versión modificada del acuerdo original. Una campaña global masiva, enfocada primero en H&M y luego en varios de sus competidores, fue edificada con la indignación pública que los con-

sumidores sintieron por las muertes, y la realidad de que tal desastre pudo haber sido prevenido. El nuevo acuerdo fue llamado el Acuerdo sobre Incendios y la Seguridad de Edificios en Bangladesh (“El Acuerdo”).

En mayo del 2013, el Acuerdo fue lanzado con 43 firmantes corporativos de 13 países diferentes y 10 firmantes sindicales, incluyendo 2 federaciones sindicales globales y 8 federaciones en Bangladesh. Fue un acuerdo sin igual, en el que las empresas se comprometieron a hacer lo siguiente:

- Requerir que las fábricas de sus proveedores se sometan a inspecciones independientes contra incendios, de edificio y eléctricas, hechas por ingenieros en seguridad calificados y que los resultados de estas inspecciones sean hechos públicos. Para muchas fábricas, estas serían las primeras instancias en que un experto en seguridad calificado entrara a estos edificios;
- Requerir que sus surtidores implementen todas las medidas correctivas necesarias para lidiar con los riesgos identificados por los inspectores, y que se hagan las reparaciones dentro de un plazo límite específico. Ingenieros del Acuerdo deberán realizar inspecciones regulares para dar seguimiento y asegurar que las reparaciones fueron hechas correctamente y que han sido mantenidas con el tiempo;
- Proveer apoyo económico a través del incremento de precios, préstamos de bajo costo, o pagos directos por renovaciones para permitirles a las fábricas hacer las reparaciones necesarias para operar seguramente;
- Mantener una relación de suministro a largo plazo con Bangladesh;
- Terminar la relación de negocios con proveedores que se rehúsen a lidiar con las violaciones de seguridad identificadas por los inspectores del Acuerdo. Tales consecuencias económicas por no cumplir son vitales para el acatamiento del acuerdo a nivel de fábrica;
- Requerir que los proveedores faciliten acceso a entrenadores independientes en seguridad

ocupacional y derechos laborales. El programa también provee un mecanismo de quejas independiente a través del cual los trabajadores pueden alertar al Acuerdo sobre violaciones potenciales de seguridad sin miedo a represalias; y

- A diferencia de las iniciativas con múltiples grupos de interesados y los programas de responsabilidad social corporativa, el Acuerdo es legalmente vinculante y ejecutable, y obliga a las marcas a implementar sus compromisos bajo el programa. El programa es gobernado por un Comité Directivo de 7 miembros, compuesto por 3 representantes de las marcas, 3 representantes sindicales, y un moderador neutral seleccionado por la Organización de Sindicatos Internacional (ILO por sus siglas en inglés). Reportes regulares sobre el progreso del programa, así como también una lista de fábricas participantes y reportes de las inspecciones, están disponibles en la página web del Acuerdo.

El Acuerdo ha tenido un impacto tremendamente positivo en las condiciones de seguridad de la industria textil en Bangladesh. Desde su comienzo en el 2013, inspectores del Acuerdo han identificado más de 122,000 violaciones de seguridad en fábricas protegidas. Desde octubre del 2018, el índice promedio de riesgos de seguridad identificados en la ronda original de inspecciones que se han reportado o verificado como arregladas alcanzado el 90%. Más de 470 fábricas han remediado completamente todas las violaciones y 934 fábricas han completado por lo menos el 90% de las reparaciones y renovaciones requeridas. Más de 300 Comités de Seguridad con trabajadores y gerencia juntos se han creado y entrenado para monitorear condiciones de seguridad regularmente y el mecanismo de quejas del Acuerdo ha resuelto más de 290 quejas de seguridad de trabajadores y sus representantes.

En el 2017, el acuerdo fue renovado por tres años más, con la posibilidad de expandir la cobertura del trabajo.

Queda aún mucho trabajo por hacer. Algunas marcas han fracasado en proporcionar los recursos económicos necesarios para llevar a cabo las reparaciones costosas y centenares de fábricas llevan meses de retraso completando renovaciones funda-

mentales. Sin embargo, el acuerdo ha marcado un importante precedente en la magnitud de mejora que se puede lograr con el modelo WSR y el poder que los trabajadores pueden adquirir para afrontar abusos que parecen insuperables.